ACUERDOS INTERNACIONALES DE PESCA C.E.E.-PAISES TERCEROS

Por
PILAR GARCIA DOÑORO (*)

EN la C.E.E. existe un déficit considerable en productos pesqueros que obliga a la Comunidad a mantener una política exterior muy dinámica para poder alcanzar acuerdos con terceros países que permitan obtener en aguas lejanas los recursos pesqueros que necesita.

En efecto, la demanda del mercado comunitario de productos de la pesca está experimentando una rápida expansión que no está atendida suficientemente por la oferta comunitaria.

El consumo aparente de la «Comunidad a Doce» de productos pesqueros para alimentación humana se ha incrementado cerca de un 8% en términos reales entre 1984 y 1987.

El estancamiento de la oferta comunitaria, procedente tanto de desembarcos como de cultivos marinos, ha hecho aumentar la dependencia exterior comunitaria en este sector de un 22% a un 27% en ese mismo período.

Si consideramos la totalidad de las necesidades de abastecimiento comunitario, incluyendo los productos pesqueros no destinados a la alimentación humana, la dependencia exterior del mercado comunitario se acrecenta fuertemente. En este balance integrado, el grado de dependencia exterior pasó de ser del 40% en 1984 al 47% en 1987.

(*) Directora General de Relaciones Pesqueras Internacionales, Secretaría General de Pesca Marítima. M.A.P.A.

— Revista de Estudios Agro-Sociales. Núm. 148 (abril-junio 1989).

Estos indicadores constituyen un hecho insólito en el conjunto de la economía comunitaria. No existe ningún sector económico comunitario primario, secundario o terciario, con un nivel de dependencia exterior del mercado tan acusado como el del sector pesquero.

En el aprovisionamiento exterior comunitario de productos pesqueros, desempeñan un papel fundamental los Acuerdos Internacionales de Pesca, pero es también esencial la Política Comercial Comunitaria, y dentro de ella, la apertura de contingentes tarifarios.

Los contingentes tarifarios pueden estar constituidos por:

- 1.º Compromisos adquiridos en el seno del G.A.T.T.
- 2.º Compromisos establecidos por decisiones autónomas de la Comunidad en función de las necesidades de mercado.
- 3.º Compromisos adquiridos en virtud de Acuerdos Internacionales de Pesca (al explicar ciertos Acuerdos de Pesca se describirán algunos de estos compromisos).

ACUERDOS INTERNACIONALES DE PESCA

En la reunión de La Haya, de 1976, los Estados miembros (EE.MM.) reconocieron explícitamente a la Comunidad, la competencia para llevar a cabo las negociaciones internacionales sobre la pesca. Por ello, la Comisión de las Comunidades Europeas, fue autorizada a negociar un cierto número de acuerdos con países terceros.

Por otra parte, a partir de 1977, la ampliación generalizada por parte de los países ribereños de las aguas de su jurisdicción a las 200 millas —ampliación ratificada en la II Conferencia de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar— dio lugar a la expulsión de las flotas extranjeras de pesca, unas veces de forma inmediata y otras veces de manera progresiva.

Los Ministros de los EE.MM. que constituían la Comunidad en aquella época se vieron obligados también a extender a 200 millas su zona de pesca en el Océano Atlántico, en una acción concertada: cada Estado miembro de la C.E.E. debía adoptar las leyes y los textos necesarios para crear esta zona de pesca, formando

el conjunto de las mismas «un mar comunitario» ordenado por la Comisión Europea.

De acuerdo con la reglamentación comunitaria, las negociaciones con terceros países van dirigidas a la elaboración de un Acuerdo-Marco de carácter general y sin contenido económico específico. La firma del Acuerdo-Marco implica la aceptación por parte del país tercero de la política de pesca de la Comunidad y supone la base necesaria para la aprobación de los Protocolos y Anejos en los que figurarán las condiciones específicas para la realización de la actividad pesquera y las contrapartidas económicas acordadas.

Con la negociación de Acuerdos Internacionales se persigue: el restablecimiento de acceso a caladeros de países en los cuales faenaba tradicionalmente la flota comunitaria, antes del «nuevo orden» establecido en el Derecho del Mar, y la obtención de posibilidades de pesca en nuevos caladeros.

Guiada por estos objetivos, la Comunidad había suscrito con anterioridad a la adhesión de España, el 1 de enero de 1986, los siguientes acuerdos: Canadá, Estados Unidos, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Guinea Ecuatorial, Madagascar, Noruega, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Suecia, Islas Feroe, Groenlandia y Finlandia.

Asimismo, y antes de nuestra incorporación a la C.E.E., España tenía suscritos 16 Acuerdos bilaterales con terceros países: Angola, Cabo Verde, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Guinea Ecuatorial, Marruecos, Mauritania, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sudáfrica, Canadá, Estados Unidos, C.E.E. y Noruega. De estos Acuerdos, todos, a excepción del de Cabo Verde y Sudáfrica, se han incorporado a Acuerdos comunitarios, en el seno de la «Comunidad a Doce», bien por razones de expiración o porque se han renegociado expresamente.

Con nuestro ingreso en las CC.EE., el 1 de enero de 1986, se inicia una nueva etapa que implica la progresiva comunitarización de los, hasta entonces, Acuerdos bilaterales, bien a la expiración de los mismos por extinguirse su período de vigencia, bien por su integración en Acuerdos comunitarios ya existentes y que, al ser renegociados, incorporaron a la flota española a tenor del Artículo 167 del Tratado de Adhesión de España a las CC.EE.

Paralelamente a este proceso de integración, tiene lugar el acceso a otros caladeros a través de nuevos Acuerdos firmados por la Comunidad con países con los cuales ni la C.E.E. ni nuestro país tenían suscrito Acuerdo.

Este proceso ha tenido, hasta la fecha, positivos resultados para el sector pesquero español, ya que no sólo se ha mantenido la capacidad de pesca, existente con anterioridad al 1 de enero de 1986, sino que han aumentado, en algunos casos, las posibilidades respecto a Acuerdos bilaterales, o bien se ha podido acceder a otras zonas de pesca, mediante nuevos Acuerdos suscritos por la Comunidad ya «a Doce».

De este modo, podemos establecer:

- a) Acuerdos suscritos por la Comunidad *ex novo* desde la incorporación española: Gambia, Comores, Gabón, Isla Mauricio (estos dos últimos no ratificados por las instancias competentes de los respectivos países), y Somalia y Costa de Marfil, pendientes de rúbrica.
 - b) Acuerdos suscritos por la Comunidad sin que España tuviera Acuerdo bilateral antes de la adhesión: Madagascar.
 - c) Acuerdos renegociados comunitariamente con existencia previa de Acuerdo bilateral: Angola, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Guinea Ecuatorial, Mauritania (el Acuerdo bilateral firmado en 1982 no llegó a concretarse en un Protocolo de Aplicación, por lo que fue en realidad un Acuerdo inoperante), Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Mozambique, Seychelles, Marruecos y Estados Unidos. En la actualidad se encuentra en fase de renegociación el Acuerdo con Canadá.
 - d) Acuerdos bilaterales integrados en los comunitarios: Noruega.
 - e) Acuerdos nuevos en fase de negociación o renegociación: Unión Soviética, República Democrática Alemana, Polonia y Cabo Verde.
 - f) Acuerdos comunitarios de pesca sin participación española: Groenlandia, Suecia, Islas Feroe. En estos Acuerdos no existe participación de la flota española, por la
-

falta de presencia reciente de nuestra flota en esos caladeros. No obstante, España está solicitando asignación de cuotas cuando se renegocian nuevos Protocolos, o cuando se ofrece a la Comunidad cuotas suplementarias, como en el reciente caso de Groenlandia. Con ello se pretende alterar el denominado «Principio de Estabilidad Relativa» en base al cual se distribuyen las cuotas de pesca entre los EE.MM.

Asimismo, se mantienen conversaciones exploratorias con: Kenia, Tanzania, Liberia, Ghana y Sierra Leona.

Para España, que ha contado desde tiempo inmemorial con una importante flota pesquera que se desplaza a caladeros lejanos, la política comunitaria de Recursos Externos es de vital importancia. Por ello, participa activamente en los grupos de «Política Exterior de Pesca», donde se debaten las condiciones de los Acuerdos y ha intentado que en el seno de los «Doce» se realice una reflexión sobre la dirección en la que tiene que ir encaminada la Política Común Pesquera, en lo que se refiere a este capítulo importante de los Acuerdos Internacionales de Pesca.

Por ello, durante los seis meses de Presidencia española, además de haber sido negociados y renegociados distintos Acuerdos (1), España ha propuesto durante la Sesión de la Reunión Informal de Ministros de Pesca, celebrada el 10 y el 11 de abril en La Toja, el siguiente tema de debate: «Perspectivas de acceso a los recursos de pesca para la flota comunitaria».

A continuación se analizará de una manera crítica la Política de Recursos Externos que lleva a cabo la Comunidad.

Los acuerdos suscritos por la C.E.E. con terceros países se pueden clasificar en cuatro tipos:

A) Acuerdos en régimen de reciprocidad

En estos Acuerdos, la Comunidad ofrece derechos de pesca dentro de las Zonas Económicas Exclusivas (Z.E.E.) de los Es-

(1) U.S.A., Groenlandia, Angola, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau, Isla Mauricio, Somalia, Costa de Marfil.

tados miembros a buques de terceros países a cambio de derechos de pesca en las aguas de esos países para la flota comunitaria. Dentro de esta categoría pueden citarse los Acuerdos con Noruega, Suecia y las Islas Feroe, así como con Noruega y Suecia en cuanto al Skagerrat y el Kattegat.

Sin embargo, hay que señalar que dichos Acuerdos no pueden ser considerados en la práctica como Acuerdos de reciprocidad, puesto que existen unos acuerdos comerciales preferenciales, en el caso de Suecia y Noruega, y un libre acceso de los productos pesqueros de Islas Feroe que son un complemento del Acuerdo pesquero, de tal manera que si no existieran dichos acuerdos comerciales, probablemente no habría Acuerdo de Pesca. Por tanto, podemos decir como características de estos Acuerdos:

- 1.^a La C.E.E. tiene intereses pesqueros en las aguas de esos terceros países, precisando de sus recursos y recíprocamente.
- 2.^a La C.E.E. tradicionalmente ha pescado en dichos caladeros.
- 3.^a Los países terceros en cuestión precisan del mercado comunitario para dar salida a su producción pesquera.
- 4.^a La producción pesquera de estos países goza de un acceso preferencial al mercado C.E.E.

Cabe preguntarse, no obstante, sobre la importancia de estos Acuerdos desde el punto de vista del aprovisionamiento del mercado comunitario. En estos Acuerdos las Partes establecen un equilibrio en el intercambio de las cuotas, pero mientras la C.E.E. obtiene, fundamentalmente, cuotas de gádidos (bacalao, eglefino, carbonero), de mayor valor económico que las cuotas cedidas de especies pelágicas. Sin embargo, se puede afirmar que teniendo en cuenta, por un lado el nivel de las cuotas de la C.E.E. en estos Acuerdos y, por otro lado, el volumen de los contingentes abiertos a estos países, el aprovisionamiento del mercado comunitario es obtenido en mayor medida en base a los contingentes que en base a las cuotas de pesca. De esto se deduce la necesidad de buscar un equilibrio entre ambas contrapartidas.

B) *Acuerdos en base al principio de «acceso a recursos-acceso a mercados»*

Este tipo de Acuerdos permite la obtención de cuotas de captura para la flota comunitaria en aguas de un país tercero, a cambio de concesiones comerciales en forma de reducción de derechos arancelarios para los productos pesqueros procedentes del país que se trate. En esta categoría pueden incluirse los Acuerdos de Estados Unidos y Canadá.

Estados Unidos permite el acceso de buques pesqueros, asignándoles anualmente una cuota por pesquería específica. Esta cuota se decide basándose en el grado con el que se coopere tecnológica y comercialmente con dicho país, reduciendo barreras a la importación de productos pesqueros estadounidenses y facilitando la creación de empresas mixtas.

En las últimas campañas se ha elevado considerablemente el nivel de exigencias para acceder a las aguas norteamericanas: el coste de los cánones y observadores de EE.UU., la exigencia de compras directas a la industria procesadora en tierra de este país y de compras al costado a su flota nacional, etc., han supuesto un encarecimiento muy importante del contenido de este Acuerdo.

Durante estos últimos años han disminuido fuertemente las asignaciones concedidas a los buques comunitarios.

Canadá asignó cuotas a la flota comunitaria durante el período comprendido entre 1982-1987 a cambio de que la Comunidad abriera contingentes a sus productos pesqueros. A partir de 1987 la flota comunitaria no ha obtenido cuotas en este país.

C) *Acuerdos de pesca con contraprestaciones económicas*

Este tipo de Acuerdos se circunscriben al área africana y se han firmado con los siguientes países: Marruecos, Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Guinea Ecuatorial, Santo Tomé y Príncipe, Angola, Mozambique, Seychelles, Madagascar, Comores, Isla Mauricio, Somalia, Gabón y Costa de Marfil.

La Comunidad, a cambio de obtener derechos de pesca para la flota comunitaria, en las aguas de estos países, ofrece a los mis-

mos una contrapartida financiera más una contribución para programas científicos y de formación profesional de los residentes de dichos países en centros docentes de los EE.MM. de la Comunidad. Además, los armadores que van a pescar a sus aguas tienen que pagar los cánones correspondientes.

Este sistema de Acuerdos pesqueros podría sufrir considerables modificaciones de carácter restrictivo en el futuro por las siguientes razones:

- Por una parte, los países en vías de desarrollo ofrecen a las flotas de pabellón extranjero la posibilidad de pescar, lo que sus flotas nacionales no están en disposición de capturar. Ello significa que, a medida que incrementan sus flotas nacionales, tanto cuantitativamente como cualitativamente o en el aspecto tecnológico, disminuirán dichas posibilidades de pesca para los barcos extranjeros, bien se traduzcan éstas en cuotas o en licencias de pesca.
- De otro lado, dichos países buscan, cada vez más, fórmulas para explotar en su beneficio una riqueza de la que son soberanos. El sistema de licencia no implica una integración de la actividad pesquera comunitaria en sus economías nacionales, aún cuando los Acuerdos contemplen la formación profesional a bordo de buques comunitarios, mediante el embarque de marineros, el fomento de programas de investigación o la concesión de un determinado número de bolsas de estudio.
- Además, y a un ritmo creciente, no faltan países en vías de desarrollo que, desde una perspectiva nacionalista agudizada por sus todavía recientes pasados coloniales, manifiestan una cierta desconfianza, hacia esta forma de explotación de su riqueza pesquera, por considerarla como una especie de «criptocolonialismo» en el que el dominio político se sustituye por un dominio económico de un sector importante de sus recursos naturales.

La consecuencia de lo anterior (potenciación de las flotas nacionales, deseo de integración de la actividad pesquera extranjera en sus respectivas economías, actitud de recelo ante el sistema del

ejercicio de la actividad pesquera mediante la adquisición de una licencia), unido a la necesidad de limitar el esfuerzo de pesca por razones de conservación, hace que sea preciso considerar muy seriamente si no habrá llegado el momento de articular nuevas fórmulas de acceso a caladeros exteriores y, asimismo, de cambiar la orientación o la «filosofía» de los Acuerdos pesqueros.

Por otro lado, la experiencia acumulada durante los años de funcionamiento de este tipo de instrumentos jurídicos ha puesto de manifiesto algunas deficiencias de los mismos: se está produciendo, aceleradamente, un desfase, una ruptura cada vez más acusada, entre los citados instrumentos y la realidad, tanto política como socioeconómica, en que se desarrolla la actividad de la flota comunitaria en caladeros exteriores.

En este tipo de acuerdos, se podrían enumerar algunas deficiencias más arriba aludidas:

- Las licencias obtenidas con este sistema están sometidas a revisión periódica en el tiempo y, en consecuencia, no constituyen un soporte adecuado para las necesarias inversiones que deben hacer los armadores para mantener operativa su flota.
- La renovación o negociación de Acuerdos pesqueros constituye un gran desgaste para la Comunidad en su conjunto (Comisión y EE.MM.), cuyos negociadores se ven forzados a actuar sometidos a una gran presión.

Una atenta observación permite advertir los efectos del desfase en ambas Partes Contratantes de los Acuerdos pesqueros en su formulación o estructuración actual. Por parte comunitaria, se hace preciso mantener la continuidad del abastecimiento de un mercado cada vez mayor que se ha potenciado, desde el punto de vista del consumo, con las últimas adhesiones de España y Portugal a la Comunidad. Ello significa que no podemos estancarnos. Es preciso avanzar y progresar, sin que baste el mantenimiento de un *statu quo* que resulta insuficiente para satisfacer las necesidades comunitarias. Por otro lado, los terceros países están anunciando, en términos inequívocos, su deseo de alcanzar unas nuevas formas de asociación que al menos complementen, cuando no sus-

tituyan, aquellas que, en unas coordenadas específicas de su evolución histórica y política, pudieron ser posibles, e incluso operativas.

D) *Acuerdos con compensación financiera y concesión arancelaria*

Este tipo de acuerdos comprenden ambas características: la primera usual en los acuerdos con países en vías de desarrollo y la segunda más específica de los acuerdos con países que tienen un nivel de industrialización y de crecimiento económico más avanzado. No obstante, esta última caracterización no es exhaustiva, ya que todo el bloque de países A.C.P. (Africa, Caribe, Pacífico) obtienen también importantes concesiones arancelarias y comerciales en base a la Política de Cooperación de la C.E.E. Los países con los cuales la Comunidad ha firmado Acuerdos de este tipo son Groenlandia y Marruecos. En el caso de Groenlandia, el Acuerdo de Pesca conlleva una compensación financiera de 26,5 millones de ECUs al año, y el libre acceso a los mercados comunitarios de los productos pesqueros originarios de Groenlandia, siempre y cuando el acceso a las zonas de pesca groenlandesas concedidas a la Comunidad en virtud del Acuerdo de Pesca resulten satisfactorias para la misma.

En el caso de Marruecos, además de una compensación financiera de 70,37 millones de ECUs al año, pueden realizarse importaciones libres de derechos arancelarios a la Comunidad de 17.500 Tm de preparados y conservas de sardinas procedentes de ese país tercero.

PERSPECTIVAS

Los Acuerdos comunitarios con Noruega y Suecia se enmarcan en las relaciones E.F.T.A./C.E.E., y como es bien sabido, los países E.F.T.A. aspiran a participar en el denominado «Espacio Económico Europeo». Si efectivamente se acuerda la consecución de la Unión Aduanera C.E.E./E.F.T.A., la libre circulación de

los productos pesqueros de estos países debería dar lugar a un incremento de las cuotas de pesca de la C.E.E. en tales Acuerdos, con lo que los mismos dejarían de ser Acuerdos en régimen de reciprocidad.

Sería conveniente reflexionar en cuanto a los países con los que existen Acuerdos de Pesca, basados en el principio de: «acceso a recursos-acceso a mercados», sobre la posibilidad de aprovisionar la industria comunitaria de transformación que no sea abastecida por la oferta comunitaria, con materia prima procedente de los mismos, en base a contingentes tarifarios preferenciales, obteniendo como contrapartida cuotas de pesca para la flota de la C.E.E. En definitiva, se trataría de sustituir, en la medida de lo posible, los contingentes autónomos, que no generan cuotas de pesca por ser otorgados *erga omnes* por los preferenciales que podrían generarlas.

Como ya se ha señalado, en el caso de países en vías de desarrollo, la obtención de acceso a sus caladeros va unida al acceso de los productos pesqueros de esos países en condiciones ventajosas al mercado comunitario (Convenios de Lomé). Por ello debería introducirse en el próximo Convenio A.C.P. una prioridad para la flota comunitaria cuando esos países terceros suscriban Acuerdos de Pesca con otros países que tienen también importantes flotas que compiten con la comunitaria.

Dicha prioridad podría instrumentarse reforzando aspectos de gran importancia para los países terceros en vías de desarrollo tales como el incremento de sus capacidades de pesca, reforzando la formación profesional en el ámbito náutico-pesquero de sus nacionales, la creación de una demanda intermedia mediante capital comunitario (industria de transformación) y, sobre todo, fomentando los vínculos económicos de las empresas comunitarias en estos países.

Por otra parte, es preciso señalar que cuando se negocia un Acuerdo de pesca es preciso conseguir de otras políticas comunes una batería de ofertas complementarias (comerciales, presupuestarias, financieras, etc.) que generan una dependencia permanente del sector pesquero y la P.P.C., frente a otras áreas.

La reflexión se plantea de la forma siguiente: ¿por qué cuando se adoptan medidas de política económica general ante terceros

países, tales como la ayuda financiera al desarrollo, refinanciación de deuda externa o mecanismos varios de cooperación, no se incluyen cláusulas pesqueras?

En este tipo de planteamientos económicos globales, juega a favor del sector pesquero su dimensión relativamente pequeña, evitando un coste elevado. Una cláusula pesquera, por reducida que sea, incluida en un acuerdo económico global, puede significar una línea de inversión de expansión considerable para el Sector Pesquero de la C.E.E., dentro de cualesquiera de las posibles variantes existentes.

Ciertamente, un tratamiento semejante exige dos premisas fundamentales: decisión política y coordinación entre gestores de diversas áreas de economía política, así como un nivel de información muy elevado para definir las cláusulas pesqueras adecuadamente.

Empresas conjuntas

Todas las iniciativas institucionales anteriores deben completarse con la comunitarización de ciertas iniciativas privadas que pueden realizar actuaciones importantes dentro del contexto de la oferta comunitaria. Una de estas iniciativas privadas es la constitución de «empresas pesqueras conjuntas».

Las empresas pesqueras conjuntas son aquellas que constituyen empresas pesqueras en asociación con personas jurídicas o físicas de un país extranjero y conforme a su legislación de ese país, con la finalidad de aprovechar conjuntamente sus recursos pesqueros.

En España dichas empresas gozaban del beneficio de poder importar, libre de derechos arancelarios y compensatorios en el límite de un contingente anual, los productos pesqueros capturados por los barcos que eran aportados por la empresa española a la empresa conjunta.

Hasta el momento actual, la Comunidad no se había planteado dotar a esta vía de un marco jurídico adecuado. La aproximación a este tema, que realizó en el año 1983, no dio los resultados esperados, y en la actualidad, el Reglamento C.E.E. n.º 4028/86 sólo contempla las Asociaciones Temporales de Empresas. Estas

Asociaciones entre socios comunitarios y de países terceros con el fin de explotar recursos pesqueros en estos últimos, reciben ayudas comunitarias a su constitución siempre y cuando el arrendamiento temporal de buques comunitarios en las «Asociaciones Temporales» conserve la propiedad y el pabellón comunitario.

Teniendo en cuenta la situación actual de acceso a los recursos pesqueros en países con Zona Económica Exclusiva, el mapa operativo bajo la restricción del pabellón comunitario, se reduce enormemente. De hecho, hasta el momento no se tiene constancia de que esta línea de ayudas comunitarias haya sido aprovechada suficientemente por la flota de la Comunidad Europea.

Por ello, cobra especial importancia la figura jurídica de las «Empresas Conjuntas», en las que se contempla el cambio de pabellón para los buques aportados a la Sociedad pesquera.

España utilizó provechosamente esta figura jurídica antes de nuestra adhesión a la C.E.E., como un instrumento que permitía reducir flota y abastecer el mercado de productos pesqueros. No obstante, desde nuestra entrada en la Comunidad, el Artículo 168 del Acta de Adhesión nos obliga a ir eliminando hasta 1992 los beneficios aduaneros que tenían las Empresas Conjuntas.

Esta línea de actuación está siendo objeto de reflexión por parte de la Comunidad Europea —como se expresó en el Consejo Informal de La Toja— por tres razones fundamentales:

- 1.^a Cada vez más, los países terceros en sus Acuerdos pesqueros con la Comunidad, introducen la cláusula de creación de empresas pesqueras conjuntas con los nacionales de los EE.MM.
 - 2.^a El abastecimiento del Mercado comunitario necesita la operatividad de todas las fórmulas posibles.
 - 3.^a Los Planes de Orientación Plurianual para las flotas pesqueras de los Estados miembros comportan fuertes reducciones de las mismas, que repercutirán en la dimensión económica y social del sector pesquero comunitario, salvo que se utilicen fórmulas imaginativas como la creación de sociedades pesqueras en países terceros en las que se incluya la aportación de buques por parte del socio comunitario.
-

En este contexto sería preciso tener en cuenta el problema que representa la barrera arancelaria comunitaria. Tal problema puede ser resuelto por tres posibles vías: exoneración de los derechos de aduana, devolución de los impuestos de frontera a los aportes al mercado comunitario de productos pesqueros o, incluso, una subvención de capital a este tipo de inversión.

Consecución del Mercado Unico

El artículo 13 del Acta Unica Europea dice textualmente: «La Comunidad adoptará las medidas destinadas a establecer progresivamente el mercado interior en el transcurso de un período que terminará el 31 de diciembre de 1992...», y más adelante precisa: «El mercado interior implicará un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada de acuerdo con las disposiciones del presente Tratado».

Las anteriores definiciones y preceptos tienen una honda significación de cara a las normas que van a regir cualquier faceta de la actividad económica comunitaria.

En cualquier caso, el modelo que diseña el artículo 13 del Acta Unica, supone tener presente dos aspectos fundamentales:

- Las funciones de producción, formación de capital y distribución no podrán ser sometidas a restricciones diferenciadas por razón de espacio, tiempo o condición.
- El modelo económico que regirá el mercado interior está diseñado bajo la fórmula de la libre competencia.

Sin embargo, en la política de recursos externos rige el Principio de la Estabilidad Relativa que es incompatible con un modelo económico de libre circulación, pues afecta intrínsecamente al principio de libertad de acceso.

En consecuencia, las posibilidades de pesca deberían ser explotadas en función de la máxima utilización de la capacidad pesquera de los EE.MM., sin asignaciones o repartos previos basados en el Principio de la Estabilidad Relativa.

Todos los esfuerzos que se realicen desde ahora hasta diciembre de 1992, deben de encaminarse a la revisión de la Política Común de Pesca para su acomodamiento a los principios inspiradores del «Mercado Unico Europeo».

R E S U M E N

Como consecuencia del déficit considerable en productos pesqueros, la C.E.E. debe mantener una política exterior muy dinámica, que le permita acuerdos con terceros países. Este trabajo pasa revista a estos acuerdos internacionales en las diversas modalidades que se presentan y analiza las perspectivas de esta política expansiva en el ámbito de empresas conjuntas, necesitadas de un marco jurídico adecuado, y el mercado único cuyo logro exigirá una revisión de la Política Común de Pesca.

R E S U M E

Comme conséquence du déficit considérable affectant les produits de la pêche, la C.E.E. doit maintenir une politique extérieure très dynamique lui permettant des accords avec les pays tiers. Il est examiné, dans ce travail, ces accords internationaux dans les diverses modalités qui s'y présentent, et il y est analysé les perspectives de cette politique d'expansion dans le domaine des entreprises conjointes, la nécessité d'un cadre juridique adéquat, et le marché unique, dont le succès exigera une révision de la politique commune de la pêche.

S U M M A R Y

Owing to the significant deficit in fisheries products, the E.E.C. must maintain an extremely dynamical external policy that will leave room for agreements with third countries. This paper considers these international agreements in their different varieties and analyses the prospects of this expansive policy in the scope of joint undertakings, the requirements of a suitable legal framework and the single market which, when attained, will involve the revision of the Common Fisheries Policy.